



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero

Sr. Fernández Costales, Consejero

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero

Sr. Madrid López, Consejero y

Ponente

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 22 de junio de 2006, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por la empresa xxxx, S.L.*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 29 de mayo de 2006 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por la empresa xxxx, S.L. debido a los daños ocasionados por el oso en unas balizas de señalización.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 31 de mayo de 2006, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 542/2006, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Madrid López.

Primero.- Con fecha 10 de noviembre de 2005, tiene entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxx una solicitud de indemnización, presentada por la empresa xxxx, S.L., debido a los daños causados por el oso "en unas estacas de señalización de la ruta de pequeño



recorrido (P.R.) xxxx". Concreta que fueron "tres estacas totalmente destruidas y cinco dañadas pero recuperables", en la localidad de xxxx, del mismo término municipal.

El informe del agente medioambiental constata que los hechos que alega el interesado en su escrito se produjeron aproximadamente el 30 de septiembre de 2005. En un informe posterior, de 24 de noviembre de 2005, describe los hechos del modo siguiente:

"(...) Se ha comprobado sobre el terreno el deterioro sufrido en una serie de balizas de señalización (...). Estos daños tienen la clara señal de las uñas del plantígrado, y de los mordiscos del mismo. El número de señales deterioradas asciende a ocho, estando tres de ellas en muy malas condiciones y las cinco restantes algo afectadas".

La valoración del daño, realizada por el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, previa tasación de los mismos, asciende a 575,13 euros.

Segundo.- El 27 de enero de 2006, notificado al interesado el 3 de febrero siguiente, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia acuerda el nombramiento del instructor del expediente.

Tercero.- El día 9 de febrero de 2006, concluida la instrucción del expediente, se da audiencia del mismo al interesado (que recibe la notificación el 16 de febrero siguiente), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, a efectos de que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos. No consta que el interesado, durante el plazo concedido al efecto, haya presentado escrito de alegaciones o documentación alguna.

Cuarto.- Con fecha 13 de marzo de 2006, se formula la propuesta de resolución en el sentido de que procede estimar la reclamación formulada.

Quinto.- El 16 de marzo de 2006 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial informa desfavorablemente la propuesta de resolución indicada, dado



que “no está acreditada la titularidad de los paneles informativos por parte de la empresa reclamante, por lo que entendemos que procede retrotraer el expediente y solicitar la aclaración de este punto”.

Sexto.- El 31 de marzo de 2006, el instructor del expediente acuerda que se incorpore a éste el contrato de ejecución de obra de “adecuación y balizamiento de senderos de uso público en el Parque Regional de xxxx”, suscrito el 3 de septiembre de 2004 por la empresa xxxx, S.L. y la Junta de Castilla y León (Director General del Medio Natural), así como la última certificación de obra, donde se aprecia que la obra se estaba ejecutando en la fecha de producción de los hechos.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

3ª.- Concurren en la parte interesada los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de



Castilla y León en la provincia, en virtud de lo establecido en los artículos 142.2 de la mencionada Ley 30/1992 y 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus órganos directivos centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.



d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- A la vista de los informes obrantes en el expediente resulta acreditado que el origen de los daños se halla en los destrozos producidos por el oso en varias balizas de señalación que la empresa xxxx, S.L. estaba colocando como elemento integrante de la ejecución de las obras de "adecuación y balizamiento de senderos de uso público en el Parque Regional de xxxx".

En cuanto al fondo de la cuestión planteada, este Consejo Consultivo estima, al igual que los órganos que han informado a lo largo del procedimiento, que existe responsabilidad por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños producidos, al concurrir todos los requisitos mencionados en la consideración jurídica 4ª del presente dictamen. La cuantía recogida en la propuesta de resolución se considera acertada, de conformidad con los informes que se recogen en el expediente.

De acuerdo con el artículo 3, apartado 7, del Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección del oso pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el plan de recuperación del oso pardo, "serán indemnizables, previo expediente incoado al efecto, los daños y perjuicios que ocasionalmente pueda causar esta especie en todo el territorio de la Comunidad y que sean debidamente comprobados".

Se deduce del expediente que en el caso que nos ocupa los daños fueron producidos por el oso. Siendo el oso pardo, tal como señala el mencionado Decreto 108/1990, especie protegida y catalogada en peligro de extinción por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que regula el catálogo nacional de especies amenazadas, y concurriendo el resto de requisitos expuestos, tal como se desprende del informe del agente forestal y de la conformidad expuesta por



**CONSEJO
CONSULTIVO**
DE CASTILLA Y LEÓN

la jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, la consecuencia es el deber de la Administración de indemnizar en la cuantía correspondiente.

En igual sentido se ha venido pronunciando este Consejo Consultivo, entre otros, en el Dictamen 719/2005, de 7 de septiembre.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución estimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por la empresa xxxx, S.L. debido a los daños ocasionados por el oso en unas balizas de señalización.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.